

**José Miguel Villarig**

Presidente de APPA

La política anti-renovable del Gobierno ha sembrado de incertidumbre e inseguridad jurídica al sector, al que ha castigado con fuertes ajustes económicos, que sólo en 2014 han supuesto 2.300 millones de euros

La apuesta renovable es rentable

Es evidente el estancamiento del sector renovable en España, así como también es evidente que se trata de un sector estratégico por el que apuestan fuertemente los países desarrollados y la propia Comisión Europea, que ha establecido el objetivo de convertirse en el líder mundial en energías renovables. A pesar de la moratoria de facto que sufre, el peso del sector renovable en la economía española es muy importante. En 2014, su aportación al PIB fue de 7.387 millones de euros (0,7 por ciento), evitó importaciones energéticas por valor de 8.469 millones, mejoró nuestra balanza comercial con 2.316 millones en exportaciones netas, invirtió 216 millones en innovación, abarató el precio del mercado eléctrico en 7.105 millones -1.867 millones más que la retribución específica que perciben (antiguas primas)-, su contribución fiscal neta fue de 970 millones, empleó a 70.570 personas...

Sin embargo, el Gobierno no ha tenido en cuenta el peso del sector renovable a la hora de diseñar la mal llamada reforma energética que ha desplegado durante los cuatro últimos años. Termina la legislatura y parece que el Ministerio de Industria solo tenía un objetivo importante, incluso antes de llegar al poder: contener el déficit de tarifa, eso sí, a costa de las

energías renovables, las grandes damnificadas de la retahíla de medidas aplicadas. El precio que la sociedad y la economía españolas tendrán que pagar durante muchos años es demasiado alto, pues se ha hecho a costa de paralizar un sector clave en la economía mundial y en el que nuestro país ocupaba una posición de liderazgo.

La política anti-renovable del Gobierno ha sembrado de incertidumbre e inseguridad jurídica al sector, al que ha castigado con fuertes ajustes económicos, que solo en 2014 han supuesto 2.300 millones de euros, a la vez que ha alterado el régimen económico sobre el que las empresas hicieron las inversiones y ha establecido un nuevo régimen que, además, podrá cambiarse cada seis años. Ello ha llevado a una fuerte judicialización del sector, con la presentación de multitud de recursos contra prácticamente todas las disposiciones del Gobierno. El recurso interpuesto por Appa contra el RD 413/2014, por ejemplo, está cada vez más cerca de llegar al Tribunal de Justicia de la UE, en el que podremos defender los intereses del sector de las renovables, una vez que el Tribunal Supremo ha dictado providencia contra el mismo.

El aplazamiento de la primera subasta del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción



de energía eólica y de biomasa, que el Ministerio de Industria había previsto para el 26 de noviembre, ha sido una muestra más de la constante improvisación con la que ha actuado el Ejecutivo en materia energética a lo largo de la legislatura.

La citada subasta, planificada con claros fines electoralistas y que supuestamente pretendía el relanzamiento de las tecnologías eólica y biomasa, no se corresponde siquiera con las propias previsiones del Ministerio de Industria incluidas en su Planificación de Infraestructuras Eléctricas, que reconoce que es necesario desarrollar nuevas inversiones renovables para cumplir con los objetivos obligatorios para 2020. La Planificación prevé la instalación de unos 8.500 MW en cinco años; esto es, instalar más de 1.400 MW anuales a partir de 2015, año que vamos a finalizar sin instalar prácticamente ni un solo MW. No se entiende que con esa previsión el Ministerio subaste solamente 700 MW -500 de ellos eólicos y 200 de biomasa-, con un plazo de ejecución de cuatro años, y deje fuera otras tecnologías como la minihidráulica y la fotovoltaica.

También han sido una constante las llamadas de atención al Gobierno de la Comisión Europea y otras instituciones internacionales a corregir su política de renovables o, de lo contrario, España no alcanzará sus objetivos europeos a 2020 y menos a 2030. Desde Appa venimos denunciando que nuestro país no está en la senda de alcanzar sus compromisos europeos pues la política del Gobierno ha estancado el sector y paralizado la instalación de nueva potencia renovable. Efectivamente, en 2014 se instalaron 43 MW y en 2015 ni siquiera se llegará a esa cifra, cuando la media de los años anteriores estaba entre 2.000 y 2.500 megavatios.

Aún así, el Gobierno hace declaraciones de apoyo al sector de las renovables, que en nada se corresponden con sus actuaciones, y reporta a Bruselas porcentajes de cumplimiento de nuestros objetivos renovables, que reiteradamente son corregidos por la propia Comisión Europea. El pasado 18 de noviembre, la Comisión hacía públicos los datos de la Oficina Estadística Europea (Eurostat), que sitúan el porcentaje de cumplimiento de España en 2014 en un 15,8 por ciento, en lugar del 17,1 por ciento reportado por el Gobierno. Un porcentaje coyuntural fruto de la baja demanda energética actual, que de recuperarse, y con el sector prácticamente paralizado, haría difícil que España cumpliera sus objetivos de renovables.

Para salir de esta dinámica negativa el sector renovable pide, entre otras reivindicaciones, que se acabe con la inseguridad jurídica, que se eliminen del precio de la electricidad aquellos costes que nada tienen que ver con la generación eléctrica, que el Estado asuma progresivamente sus compromisos por derechos otorgados, que se compense a las tecnologías renovables por el efecto depresor que propician en el mercado eléctrico, que no se pospongan los cobros de las empresas generadoras, que se establezca una verdadera política de fiscalidad renovable o que al menos no se castigue a las renovables más que a otros sectores, que se dote al sector de un marco normativo estable... En definitiva, que el Gobierno que salga de las urnas apueste por las energías renovables y haga planteamientos de consenso a largo plazo, que nos permitan evolucionar hacia un modelo energético basado en renovables, limpias, autóctonas y ya competitivas económicamente.

José Miguel Villarig

Presidente de APPA

Desde APPA venimos denunciando que nuestro país no está en la senda de alcanzar sus compromisos europeos, pues la política del Gobierno ha estancado el sector y ha paralizado la instalación de nueva potencia renovable